

La política de Reagan, impracticable, dictamina una comisión del Congreso

Proceso No. 0585-25
18 de enero de 1988
Sección Internacional

Rubén Aguilar Valenzuela

En 1987, la ayuda de Estados Unidos a El Salvador excedió la contribución interna al presupuesto nacional, con lo que ese país se aproxima al récord de dependencia de la ayuda estadounidense alcanzado por Vietnam del Sur, en el clímax de la guerra, revela una reciente investigación del Congreso norteamericano.

El Comité del Congreso para el Control de Armas y Política Externa designó al senador Marck O. Hatfield (republicano por Oregon), al representante Jim Leach (republicano por Iowa) y al representante George Miller (demócrata por California), para que hicieran una investigación sobre la ayuda norteamericana en El Salvador. El pasado noviembre, la Comisión bipartidaria entregó el informe: "Financiando el fracaso: la política de Estados Unidos en El Salvador y la urgente necesidad de reformarla", que contiene el resultado de sus trabajos y también recomendaciones para el Congreso y el gobierno de Reagan.

Desde que comenzó la guerra en El Salvador, hace siete años, los Estados Unidos han gastado más de 3,000 millones de dólares -más de mil millones sólo a partir de 1985- financiando "una política fracasada", afirma el informe y agrega que la ayuda estadounidense para el año fiscal de 1987 fue de 608 millones de dólares, equivalentes al 105% de las contribuciones internas al presupuesto nacional. Durante 1987, por cada tres dólares de la ayuda norteamericana que fue destinada a la guerra, sólo se "empleo un dólar en atender a sus causas". Esta proporción, aseguran los congresistas, está por debajo de la de cuatro a dos dólares mantenida en 1985 y, advierten: el presupuesto solicitado por Reagan para 1988 refleja una relación de 3.5 a un

dólar. En los hechos, dice el informe, "continúa el uso de la ayuda económica para apoyar los esfuerzos de la guerra".

Los miembros de la Comisión afirman que de acuerdo con cifras del gobierno salvadoreño, "nunca antes a disposición del Congreso", las bajas producto de la guerra se han incrementado a partir de 1985 "tanto en las filas del gobierno como en las de los insurgentes" y sostienen que "pese a la incesante ayuda militar y a los cambios en las tácticas militares salvadoreñas diseñadas para contrarrestar la efectividad de los rebeldes, los ataques de éstos a la economía se incrementaron durante el año en 29%", de manera que los 300 millones de dólares en daños a la economía, producidos anualmente por la actividad de los rebeldes, "apenas iguala la ayuda económica estadounidense concedida para estabilización y reparación de daños".

Las cifras económicas y sociales, continúa el informe, "muestran que las condiciones de vida para la mayoría de los salvadoreños han empeorado dramáticamente desde el inicio de la guerra". La mitad de la población se encuentra subempleada o desempleada -cantidad diez veces superior a la de antes de la guerra-, uno de cada diez salvadoreños vive en refugios o campamentos y la mortalidad infantil "saltó de 36 en 1986 a 91 por cada mil en 1987", a lo que habría que añadir "que uno de cada cuatro niños está en estado de desnutrición".

"Un documento llegado a nuestro poder, denuncian los congresistas autores del informe, prueba que el ejército salvadoreño tiene autoridad directa sobre el programa de 'Acción Cívica', costado principalmente con fondos estadounidenses, a pesar de que las leyes de Estados Unidos prohíben el uso de la ayuda económica y alimentaria con propósitos militares" y consta también, añade el informe, que el presidente Duarte ha firmado un acuerdo que concede autoridad al ejército para el aprovechamiento de esos recursos, que son utilizados, "según se nos ha reportado", para obligar a los receptores

de la ayuda norteamericana a "integrarse a las unidades de defensa civil" controladas por los militares.

UN ESTILO DE "PACIFICACION"

Los fondos de ayuda estadounidense a El Salvador se caracterizan, de acuerdo con la investigación, por "el mal empleo de la corrupción". El documento da ejemplos de los malos manejos, entre los que destacan: el uso de ayuda de los Estados Unidos en tareas proselitista del partido en el poder, la venta de combustible comprado con la ayuda militar estadounidense a la "contra" nicaragüense y el uso indebido de la "desesperadamente necesitada" ayuda para hacer frente a los daños causados por el terremoto en 1985.

Las campañas de "pacificación" en el campo, conducidas por el ejército salvadoreño y financiadas con el respaldo norteamericano, han fracasado en sus intentos de erosionar la base de apoyo de los rebeldes. Desde el punto de vista de los congresistas "existe evidencia de una gran parte de la población no apoya a ninguno de los contendientes en la guerra", pero también que "el número el número de los insurgentes y sus seguidores se ha mantenido constante".

De acuerdo con la Comisión, la que presenta El Salvador es todavía peor que la de 1985, cuando los mismos congresistas realizaron una investigación similar, también por encargo del Comité del Congreso para el Control de Armas y Policía Externa. En aquél entonces, Hatfield Leach y Miller escribieron en su informe que la ayuda norteamericana en lugar de contribuir a finalizar la guerra "tendía a perpetuarla, ignorando las reales condiciones que dan origen al conflicto".

En el documento de 1985 se concluía, dicen ahora los congresistas, "que la solución militar para los Estados Unidos perseguía (aún cuando no lo admitía), era impracticable" y se advertía que "ante la falta de un cambio sustancial,

tanto en los objetivos de la política estadounidense hacia El Salvador, como en la naturaleza de la ayuda prestada, las condiciones sociales y económicas seguirían deteriorándose o en el mejor de los casos habría un estancamiento militar, económico y político".

Los congresistas sostienen que la nueva investigación, basada principalmente en entrevistas sostenidas en El Salvador y en investigaciones independientes, "resulta ser lo más perturbadora". Ante este panorama, el Comité considera que el Congreso y el gobierno de Reagan deben aceptar que la búsqueda de una salida militar para el conflicto en El Salvador "ha producido un completo estancamiento" y que ante esta situación se debería buscar el "camino de un acuerdo negociado que finalice la guerra".

Ante los resultados que arroja la investigación, se propone que el Congreso debería "modificar drásticamente la actual relación de tres a uno entre la ayuda vinculada con actividades de guerra y la ayuda para las reformas y el desarrollo en El Salvador". Se precisa que el énfasis debería ser puesto en aspectos tales como "el suministro de agua potable, nutrición, salud pública, agricultura y educación". Los integrantes del Comité proponen que el Congreso "debería luchar por una participación más activa en la fiscalización, evaluación y restricción de la ayuda". Se recomienda también que el apoyo "a los cuerpos de seguridad debería ser cortado hasta que el sistema judicial salvadoreño mostrara capacidad para procesar a oficiales del ejército que violan los derechos humanos".

La contribución de la ayuda militar y la "proporcionada en moneda", proponen Hatfield, Leach y Miller, "debería estar vinculada a los esfuerzos realizados en la construcción de un arreglo político" y aconsejan retirar el 50% de la ayuda" hasta que el gobierno informe al Congreso sobre el estado del diálogo entre el gobierno salvadoreño y los insurgentes". A partir de tales informes, entonces, "el Congreso liberaría los restantes fondos únicamente si tuviese la convicción

de que el gobierno norteamericano y el gobierno salvadoreño están haciendo todo lo posible por alcanzar un acuerdo político".

El informe de los congresistas no deja lugar a dudas sobre las posibilidades de la vía militar como salida a la situación salvadoreña y reconoce como el único camino la negociación política; posición presentada una y otra vez por los insurgentes salvadoreños reunidos en la coalición FMLN-FDR y también por el grupo Contadora, el Grupo de apoyo y la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El informe ofrece, sin duda, salidas y abre nuevos horizontes al gobierno de Reagan y al Congreso en la actual situación electoral en los Estados Unidos; pero ante la línea, estos últimos siete años, de la política exterior norteamericana para Centroamérica, y a pesar de la evidencia contundente del informe, surgen series dudas sobre la posibilidad de que el presidente Reagan y sus más estrechos colaboradores en el diseño e implementación de la política norteamericana en el área, tomen en cuenta el realista informe de los congresistas Hatfield, Leach y Miller.